

Fortaleza de las Instituciones

Las instituciones, lejos de ser obstáculos para la continuidad de las acciones de gobierno, los períodos electorales y los cambios de gobierno pueden ser utilizadas como una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos de desarrollo y explorar la posibilidad de convertir las acciones particulares de los gobiernos en verdaderas políticas de Estado.

¿Qué es una institución? De acuerdo con algunas definiciones, es una estructura u organismo que se constituye con base a normas o reglas que regulan y satisfacen las necesidades sociales. Algunas instituciones son: la familia, el sistema educativo, la religión, el sistema económico y el gobierno. Lo que observamos es que la fortaleza de las instituciones democráticas es posiblemente el factor más determinante de porqué hay más o menos corrupción en un país. En América Latina, si bien tenemos sistemas políticos democráticos que en mayor o en menor medida funcionan en lo electoral desde hace algunas décadas, con elecciones y alternancia en el poder entre partidos, las instituciones en muchas ocasiones son frágiles y están sujetas a manipulación política.

La fortaleza de las instituciones es posiblemente el factor más determinante para mayores o menores índices de corrupción, pero no es el único. Hay temas también de educación y valores, por ejemplo. También está la presión de la desigualdad en el ingreso de las personas y las familias,

Es muy sencillo, las instituciones son interdependientes y funcionan con reglas. Por ejemplo, el Estado es una institución que se sujeta a una Legislación o normatividad legal, que se desprende de la Carta Magna. ¿En México seguimos reglas o las desconocemos?

Un sistema adecuado de pesos y contrapesos internos propicia el trabajo colaborativo y mayor consistencia en la toma de decisiones. En contrapartida, el centralismo y verticalismo excesivos, las decisiones en manos de una sola persona tal vez permitan mayor velocidad en las decisiones, pero no necesariamente que sean las más adecuadas.

Preocupa, además, obviamente, la extensión de la antipolítica, instrumento inevitable de todos los populismos. Y no es menos grave y alarmante la multiplicación de voces que extienden el mensaje letal de que la ley es prescindible y debe dejar su sitio a la voluntad política. Ello está deteriorando las instituciones y debilitando a México y no solo en lo que se refiere al circuito propiamente político.

Basta fijarse para acreditarlo en la larga demora en la renovación del órgano de gobierno de los jueces en un momento en el que todos los focos de la nación están puestos en ellos. O en la falta de libramiento del dinero necesario para que las administraciones puedan realizar sus pagos. Por no hablar del desapego ciudadano hacia la democracia y sus protagonistas o de las repercusiones económicas de una crisis política tan prolongada como la que, de hecho, vivimos.

Tenemos un Estado mexicano cuyas instituciones se fueron consolidando en el marco de una institucionalización priista que empezó formalmente en 1946 -año de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Partido Revolucionario Institucional ocupó de forma ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas de México entre los años 1930 y 2000. Las decisiones políticas del partido determinaron el curso de la economía y la sociedad del país a lo largo del siglo XX. Pero estamos a tiempo de corregir el rumbo. Es apremiante hacerlo. Es preciso renovar la fortaleza institucional y propiciar soluciones estables. Hacer que las instituciones desarrollen de una manera sana los fundamentos propios de un Estado social y democrático de derecho y, entre ellos, el respeto a la legalidad y la gestión honrada de la cosa pública. Propiciar, en fin, que trabajemos todos juntos en un proyecto definido de país del que ahora mismo carecemos, en un momento en el que los retos son tan imperiosos.

Con reformas, siempre necesarias, para ir adaptándonos a los cambios profundos que se están produciendo. Pero sobre todo con responsabilidad en los comportamientos. De la clase política en primer lugar, pero también del conjunto de la sociedad y de los medios de comunicación. Mal está que la política sustituya el rigor por el tacticismo, la retórica, la propaganda o el interés particular. Pero no es menos inquietante que la sociedad asista indiferente a ello.

Algunas instituciones son débiles porque los actores que las crearon no tienen la intención de hacerlas cumplir.



No es éste un tiempo para la irresponsabilidad o la indiferencia, sino para que cada uno aporte, haciendo lo que debe, para el Estado y para la convivencia constitucional.

En ese clima urge que los poderes legislativos y judicial recobren su normalidad y pleno funcionamiento y lo hagan incluso con mayor fortaleza. Al principio de la pandemia cabía aceptar la interpretación, y así se hizo, de que era aconsejable centrarse en la lucha contra la Covid. Tiempo habría después de las exigencias de responsabilidades y de abordar nuevas leyes menos urgentes. La opinión empezó a cambiar con lo que se interpretaban como excesos de algunas de las decisiones del mando único y del núcleo decisorio del Ejecutivo. Esa situación puso en primer plano la vuelta a cierto control en el legislativo del gobierno.

El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

Mediante la complementariedad entre las formas de democracia representativa y participativa, las instituciones públicas logran fortalecerse, aportando nuevas soluciones para continuar construyendo sociedades más justas, con menores niveles de pobreza y con oportunidades para todos.